



Gobernabilidad, Seguridad y Justicia

Prospecto del Programa para 2011-2016

Nota: Este documento es una versión abreviada del prospecto del programa Gobernabilidad, Seguridad y Justicia aprobado por el Consejo de Gobernadores del IDRC en octubre de 2010.

División de Programas y Asociaciones
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC)
Enero de 2011

Índice de contenidos

LISTA DE ABREVIATURAS	II
1. RESUMEN EJECUTIVO.....	1
2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES.....	2
A. EL DESAFÍO DEL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN.....	2
B. ACERCA DEL PROGRAMA	5
3. ENFOQUE DE PROGRAMACIÓN	9
A. META DEL PROGRAMA.....	9
B. RESULTADOS DEL PROGRAMA.....	10
C. ESTRATEGIA Y ENFOQUE DEL PROGRAMA.....	10
D. PRIORIDADES REGIONALES Y TEMÁTICAS.....	12
4. REFERENCIAS	16

Lista de abreviaturas

CAD	Canadian Dollar Dólar canadiense
DFAIT	Department of Foreign Affairs and International Trade (Canada) Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional (Canadá)
DFID	Department for International Development Ministerio de Desarrollo Internacional
ECOWAS	Economic Community of West African States Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
ESA	Eastern and Southern Africa África Oriental y del Sur
FLACSO	Latin American Faculty of Social Sciences Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
GSJ	Governance, Security and Justice Gobernabilidad, Seguridad y Justicia
HSRC	Human Sciences Research Council (South Africa) Consejo de Investigación en Ciencias Humanas (Sudáfrica)
ICT TIC	Information and Communication Technologies Tecnologías de la Información y Comunicación
ICT4D	Information and Communication Technologies for Development Tecnologías de la Información y Comunicación para el Desarrollo
LAC	Latin America and the Caribbean Latinoamérica y el Caribe
LAU	Lebanese American University Universidad Libanesa Americana
MDG ODM	Millennium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio
MENA	Middle East and North Africa Oriente Medio y Norte de África
NGOs ONGs	Nongovernmental Organizations Organizaciones no gubernamentales
Norad	Norwegian Agency for Development Cooperation Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo
OECD OCDE	Organisation for Economic Co-operation and Development Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OECD-DAC	Development Assistance Committee
OCDE-CAD	Comité de Ayuda al Desarrollo de OCDE
PCD	Peace, Conflict and Development Paz, Conflicto y Desarrollo
SEP	Social and Economic Policy Política Social y Económica
SSA	Social Scientists Association Asociación de Científicos Sociales
START	Stabilization and Reconstruction Task Force (Canada) Fuerzas de Estabilización y Reconstrucción (Canadá)
UNDP PNUD	United Nations Development Programme Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
USAID	United States Agency for International Development Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
WRC	Women's Rights and Citizenship Derechos y Ciudadanía de la Mujer

1. Resumen ejecutivo

La atención mundial se concentra cada vez más en los retos que enfrentan los estados fracasados o frágiles, incluyendo su imposibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sumado a la pérdida en vidas humanas, heridos e infraestructuras destruidas, la violencia armada y la inseguridad contribuyen a incrementar los costos del comercio, siembran temor en los inversores, empujan a la mano de obra calificada a emigrar y reducen las oportunidades económicas en general. Para muchos de los más pobres, el propio estado pasa a ser el perpetrador de esta inseguridad al hacer difícil que los ciudadanos comunes y corrientes accedan a la justicia y exijan rendición de cuentas. Al enfrentarse a autoridades formales que son débiles, insensibles o represivas, los ciudadanos suelen tender hacia fuentes alternativas de gobernabilidad, seguridad y justicia, incluyendo pandillas, milicias e instituciones informales de gobernabilidad y derecho. Estos mecanismos informales les ofrecen beneficios en ausencia de estados efectivos; pueden también socavar la legitimidad del estado y reproducir las formas de violencia y exclusión.

En el pasado, las intervenciones en pro de la reconstrucción del estado han tenido resultados decepcionantes debidos en gran parte a que se prestó poca atención a la importancia de las instituciones formales y de las dinámicas entre el estado y la sociedad, en estos contextos. En muchas ocasiones el resultado de esto ha sido el fortalecimiento de numerosas instituciones que carecen de legitimidad bien fundamentada a nivel de la población. Aún en aquellos estados que podrían considerarse como democráticos, tanto ciudadanos como comunidades han sido marginados de los procesos políticos y siguen viendo amenazada su seguridad desde múltiples ámbitos.

La meta del programa GSJ es apoyar la generación de conocimiento relevante en materia de políticas sobre las condiciones para incrementar la legitimidad y responsabilidad de las autoridades públicas en áreas como gobernabilidad, seguridad y justicia. El programa se centrará en las dinámicas estado-sociedad, en particular las interacciones entre actores estatales y no estatales y entre instituciones formales e informales. Este enfoque pone énfasis en la importancia y complejidad de las dinámicas locales; tanto los desafíos resultantes de esta fragilidad, como las estrategias para superarlos, emanan de los patrones de relación estado-sociedad. Para lograr resultados de desarrollo positivos, será necesario contar con ciudadanos y comunidades comprometidos así como autoridades públicas legítimas y capaces de rendir cuentas.

A través del modelo de subvenciones con valor agregado (*grants-plus model*) del IDRC, el programa apoyará la investigación específica en el contexto de entornos complejos que representan todo un reto. Trabajaremos con investigadores de reconocida capacidad así como con investigadores noveles para mejorar la elaboración de políticas basadas en evidencia a diferentes niveles. Si bien el programa dedicará la mayor parte de sus recursos al apoyo de investigación de base local sobre las interacciones entre estado y sociedad en materia de gobernabilidad, seguridad y justicia, lo hará de modo tal que nos permita derivar opiniones analíticas sobre temas de importancia para las comunidades académicas o aquellas otras abocadas a las políticas de desarrollo. El programa buscará oportunidades para incorporar a los beneficiarios en la investigación e integrarlos en redes

temáticas y reuniones que permitan incrementar la transferencia de conocimiento y cultivar una colaboración efectiva con socios en políticas estratégicas y donantes.

Al finalizar el programa, esperamos que nuestra cartera de proyectos de investigación contribuya nuevos aportes con respecto a las condiciones necesarias para aumentar la legitimidad y responsabilidad de las autoridades públicas, informando y propiciando de este modo el debate en torno al fortalecimiento del estado basado en la evidencia y el desarrollo de políticas. Esperamos que nuestros beneficiarios estén así mejor preparados para identificar y aprovechar los vínculos que llevan de la investigación a las políticas y, en algunos casos, asumir papeles de liderazgo facilitando el compromiso participativo de ciudadanos y comunidades en la elaboración de políticas.

2. Contexto y antecedentes

a. El desafío del desarrollo y análisis de situación

La atención mundial se concentra cada vez más en los retos que enfrentan los estados fracasados y frágiles. Estos países, sin embargo, constituyen nada más que un extremo de todo un espectro de naciones en lucha por fomentar el orden y la autoridad y de ciudadanos que buscan seguridad y representatividad. Estos importantes desafíos los enfrentan también otros estados que, si bien son fuertes e incluso democráticos, intentan extender su autoridad en determinadas comunidades—ya sea en áreas geográficamente aisladas o en zonas urbanas marginadas. Estos enclaves locales llegan a crear sus propias estructuras que perpetúan la violencia y pueden ser muy difíciles de superar. La experiencia ha demostrado que la mayor parte de los abordajes apoyados por donantes, dirigidos a la reconstrucción de un estado, han tenido resultados tremendamente desalentadores, en gran medida debido a que han ignorado la importancia de las instituciones informales y las interacciones entre estado y sociedad, en especial a nivel local.

En los contextos de desarrollo donde las instituciones públicas son débiles hay más propensión a la violencia y al conflicto, muchas veces en un círculo vicioso y a un costo muy alto. La Secretaría de la Declaración de Ginebra estima en unos 95 a 163 mil millones de dólares el costo anual mundial de la violencia armada en entornos que no están en situación de conflicto, cifra muy superior a la del conflicto mismo. La violencia armada que no se vincula a conflictos existentes—homicidios, secuestros, extorsión, violencia de pandillas, tráfico—tiene muy altos costos económicos. Aumenta los costos de la actividad comercial, infunde temor en los inversores, reduce la productividad, obliga a la mano de obra calificada a emigrar y reduce las oportunidades económicas en general (Abrahamson 2009). Más aún, los altos índices de delincuencia desvían los recursos del estado hacia la tarea de imponer la ley, si bien a menudo fracasan en su intento de velar por la seguridad ciudadana.

Se constata una escalada de muertes indirectas ocasionadas por los conflictos y muertes por violencia no vinculada a conflictos, si bien el número de muertes que son consecuencia directa de los conflictos van decreciendo. Las naciones más pobres se ven afectadas de manera desproporcionada: más de un tercio de estos países ha experimentado conflictos en los últimos 20 años, y las tasas de homicidio son tres veces más altas que en sus

contrapartes de renta media y alta. Aún en aquellos casos en que los estados son fuertes, como ocurre en muchas de las economías emergentes, hay focos de violencia que amenazan con socavar el avance del desarrollo. Algunos países de renta media, que de alguna manera son estables y democráticos, también están sufriendo un aumento de la violencia debido a mayores índices de criminalidad (Global Burden of Armed Violence Report 2008).

El Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los ODM identificó la violencia armada como una barrera en el alcance de estos objetivos, citando factores tales como el gasto militar excesivo, la destrucción de la infraestructura de salud y educación y apropiación de recursos básicos por élites. Asimismo, la violencia y la inseguridad van erosionando la cohesión social y llevan a los ciudadanos a vivir en permanente temor vinculado al abuso de los derechos humanos, pérdida de propiedad y daños físicos. Para muchos de los más pobres, el propio estado se convierte en el perpetrador de esa inseguridad, haciendo difícil para los ciudadanos comunes y corrientes obtener justicia o exigir rendición de cuentas.

ODMs y fragilidad

Las situaciones de fragilidad suelen caracterizarse por una violencia e inseguridad permanentes, el legado de un conflicto, gobernabilidad débil y la incapacidad de distribuir bienes públicos de manera eficiente y equitativa. En la Cumbre de los ODM del 2010, Justin Lin, Economista Jefe y Vicepresidente Principal del Banco Mundial, señaló que 22 de los 34 países que están más lejos de lograr los ODMs están en conflicto o han salido recientemente de alguno. Como grupo, estos países tienen un rezago del 40 - 60% en cuanto al logro de los ODM, con respecto a otros países de renta baja o media (Ross, 2010).

Los estados pueden emplear fuerzas ilegítimas para proteger sus intereses, o pueden permitir el uso de fuerzas ilegítimas por parte de actores no estatales. En muchos casos, las alianzas tácitas entre estados y grupos armados privados contribuyen a perpetuar las desigualdades económicas, apropiación de recursos básicos y toda una gama de otros males relacionados. Tanto en África Occidental como en América Latina, los vínculos entre grupos armados, redes delictivas y elementos del estado han llevado a muchos observadores a declarar una “criminalización del estado” en dichos contextos. La inseguridad e impunidad generan corrupción y políticas inadecuadas, exacerbando las desigualdades existentes y promoviendo los intereses sesgados de determinados grupos (Collier 2009, p.11).

Este ha sido precisamente el caso que se ha dado en países de renta baja, ricos en recursos. Los actores que tienen influencia económica y política suelen burlar la ley para beneficiarse con las rentas que estos recursos proporcionan y acallar el desacuerdo local. Las comunidades y ciudadanos locales son quienes se ven más afectados por la violencia que a menudo surge entre élites competitivas y milicias asociadas. En tales circunstancias, las empresas privadas, tanto locales como multinacionales, influyen de manera directa o indirecta en la naturaleza del conflicto entre estado y comunidad. Esta influencia de los actores económicos privados sobre la gobernabilidad local justifica una investigación adicional.

Cuando las instituciones formales son débiles o indiferentes, las comunidades suelen volcarse a fuentes alternativas de gobernabilidad, seguridad y justicia. Según lo demostrado por estudios recientes, muchas personas que viven en estados frágiles confían en formas de seguridad y justicia que no son estatales, y eso incluye las pandillas, milicias e instituciones informales de gobernabilidad y derecho (OCDE 2007). Si bien

estos mecanismos informales proveen algunos beneficios, pueden además minar la legitimidad del estado y reproducir las formas de violencia y exclusión. Las poblaciones marginadas o excluidas son, por lo general, las que experimentan mayores niveles de inseguridad y menores oportunidades de involucrarse de manera significativa con las autoridades públicas.

Los cambios demográficos, específicamente el aumento repentino de las poblaciones jóvenes en la mayor parte del mundo en desarrollo, son fuente de preocupación. El aumento demográfico de los jóvenes tiende a exacerbar las situaciones de desempleo y urbanización y la reciente crisis económica mundial podría estar creando una 'generación perdida' de trabajadores. Estas situaciones dejan en los jóvenes una percepción y, de hecho, una falta de oportunidades futuras, que a su vez llevan a una mayor tendencia a incurrir en la violencia, ya sea a través del ingreso a grupos militantes, al delito organizado o indirectamente como observadores del conflicto. En América Central se estima que el ingreso a pandillas, por ejemplo, ronda entre los 69.000 e incluso llegaría hasta los 200.000 (Jutersonke et al. 2009). El crimen organizado genera un sentimiento de pertenencia y propósito en aquellos grupos que han sido relegados por la sociedad.

De investigación a políticas

Las recomendaciones sobre políticas para la prevención de la violencia por parte de los jóvenes que se desarrolló en el proyecto "Violencia de Jóvenes y Crimen Organizado e Inseguridad Pública en América Central, México y Haití" fueron incorporadas en el nuevo Programa Nacional de Políticas para la Juventud en Guatemala, lanzado por el Presidente Álvaro Colom el 12 de agosto de 2010, en el Día Internacional de la Juventud. Así, el proyecto apoyado por IDRC ayudó a crear una base sólida para una futura inversión y programación pública.

Todos estos temas necesitan ser ubicados en el contexto de los riesgos, beneficios y oportunidades de una sociedad de la información que se conecta en redes y va penetrando aún en los estados más frágiles. Las nuevas formas de violencia surgen también de los usos ilegítimos de la tecnología en áreas tales como el delito informático, manejo de datos personales, control del flujo de información o perfiles sociales discriminatorios. Por otro lado, existen oportunidades innovadoras para la movilización de los ciudadanos. En una época en que los dispositivos móviles resultan accesibles para la gran mayoría de las personas, aún en los países más pobres, la naturaleza de la participación de los ciudadanos se ha visto radicalmente modificada. La investigación demuestra cómo las nuevas herramientas TIC tienen el potencial de desencadenar la movilización y fomentan la participación de las personas, aún en contextos de post conflicto como en Liberia (Smyth, Etherton, y Best 2010).

Los donantes se han mantenido muy activos en cuanto a programación en situaciones de fragilidad y conflicto y han reconocido temas clave con respecto a legitimidad y rendición de cuentas. En un discurso del año 2009, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, identificó diez principios clave de compromiso en estados frágiles afectados por algún tipo de conflicto que incluían (i) construcción de la legitimidad del estado, (ii) provisión de seguridad y (iii) creación de un estado de derecho y orden jurídico, por sobre todo. Del mismo modo, la Red Internacional sobre Conflicto y Fragilidad de la OCDE identifica la gobernabilidad democrática, seguridad y justicia como elementos básicos que hacen a la legitimidad del estado y su clara rendición de cuentas cuando la situación es de fragilidad.

Las prioridades y actividades de investigación de estas destacadas organizaciones en relación al fortalecimiento del estado apuntan todas a la necesidad de conocer más acerca de los cimientos políticos y sociales de la construcción del estado; en otras palabras, las negociaciones entre estados y sociedades que sostienen a las instituciones. Más exactamente, estas organizaciones identifican las relaciones entre actores estatales y no estatales (grupos armados, caudillos, élites económicas) y entre instituciones formales e informales (consejos Shura, cortes consuetudinarias, comités locales) como áreas que requieren una mayor investigación y análisis.

Los investigadores se concentran cada vez más en las relaciones estado-sociedad como elemento integral de la construcción del estado. Paul Collier, por ejemplo, sostiene que rendir cuentas es aún más difícil que brindar seguridad; a diferencia de muchos otros bienes públicos, el estado no puede simplemente rendir cuentas sin la participación ciudadana (Collier, *Development Outreach* 10). Las elecciones constituyen una institución bien conocida cuando se trata de promocionar la rendición de cuentas, pero existen además muchos otros mecanismos formales e informales. La investigación reciente indica que la participación positiva de los ciudadanos fuera de los procesos electorales puede llevar a un cambio sistemático mucho más amplio, a través del establecimiento de una nueva legislación, así como procesos y culturas de responsabilidad (Benequista, Gaventa y Barrett 2010). En el curso de los últimos diez años, otro ejemplo concreto en cuanto a responsabilidad está dado en los esfuerzos por desarrollar herramientas y sistemas TIC para aumentar el nivel de rendición de cuentas, transparencia y apertura de servicios públicos y autoridades en la administración diaria del estado y la gestión de bienes públicos, en particular en los países de América Latina.

Otro factor que recibe la atención de los expertos internacionales en el tema de la paz y reconstrucción del estado es la legitimidad, a medida que son más los observadores que reconocen la importancia del aporte local. Si bien es difícil de medir, la legitimidad se refiere al apoyo normativo generalizado para un orden, institución o actor político o social en particular, que se fundamente en el *consentimiento* y no en la *coerción* (Maley 2008). Es importante destacar que, tanto las autoridades informales como las formales pueden beneficiarse de la legitimidad popular, y lo mismo se aplica a las instituciones democráticas y no democráticas. Así, los cabecillas autoritarios o las pandillas comunitarias podrían ser considerados como legítimos, mientras que las autoridades democráticas podrían ser vistas por algunos ciudadanos como corruptas e ilegítimas.

b. Acerca del Programa

El Programa GSJ apoyará la creación de conocimiento relevante en materia de políticas sobre las condiciones necesarias para aumentar la legitimidad y rendición de cuentas de las autoridades públicas en las áreas de gobernabilidad, seguridad y justicia. El programa se basará en el trabajo previo de otras tres iniciativas de programa: PCD, WRC y ICT4D.

El programa apoyará una investigación relativa a políticas en estados frágiles, en vías de democratización o transición; esta investigación hará un sondeo de las características e impacto de las interacciones entre las fuerzas sociales—como por ejemplo, los ciudadanos, instituciones no estatales, sociedad civil y organizaciones basadas en la fe—y actores estatales como instituciones públicas, fuerzas de seguridad y sistemas de justicia.

También atenderá la forma en que los ciudadanos utilizan los recursos disponibles, incluyendo las tecnologías emergentes, para fortalecer sus propias capacidades de organización y comunicación y poder interactuar con otros actores estatales y no estatales.

Temas básicos de programación

El programa se focalizará en las interacciones estado-sociedad a lo largo de tres dimensiones básicas de programación: gobernabilidad, seguridad y justicia. Estas dimensiones se han priorizado sobre la base de la experiencia de programación pasada, consultas regionales y revisión de la literatura pertinente.

Los arreglos de gobernabilidad, como por ejemplo acuerdos políticos, negociación entre grupos y acuerdos de paz establecen las “reglas del juego” a través de las cuales se ejerce el poder; seguridad y justicia son, simultáneamente, funciones de supervivencia para el estado, y funciones esperadas que los ciudadanos exigen. Por ejemplo, un estado, para sobrevivir, necesita protegerse de amenazas tanto internas como externas pero también tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables y marginados. Lograr el equilibrio entre fuerza y responsabilidad al suministrar seguridad es importante a la hora de aumentar la legitimidad del estado y granjearse la aprobación popular. El establecimiento del estado de derecho para fomentar el orden y la autoridad dentro de la sociedad, debe ser equilibrado con un efectivo otorgamiento de acceso a la justicia, mediante el cual el estado se obliga a dar cuenta ante los ciudadanos de su propio cumplimiento con la ley (DFID Emerging Policy Paper, junio de 2009).

Todos estos temas deben ser explorados dentro de un contexto de coexistencia de instituciones formales e informales. Si bien no existe una línea divisoria clara entre ellas, esta tipología se ha usado a menudo para diferenciar entre aquellas instituciones que cuentan con una estructura organizativa explícita basada en una fundación escrita de reglas y procedimientos codificados y aquellas otras que no la tienen. La “informalidad” no debe ser simplemente comparada con lo tradicional o de uso habitual; se refiere en un sentido más amplio a “reglas socialmente compartidas, generalmente no escritas, que son creadas, comunicadas y cumplidas fuera de los canales oficialmente sancionados” (Helmke y Levitsky 2004). En muchas situaciones, las instituciones informales, en la manera de prácticas o reglas, pueden llegar a incidir en las instituciones formales (por ejemplo, el clientelismo en la política latinoamericana). Las instituciones informales son capaces de complementar y aumentar la efectividad de las instituciones formales, o pueden competir cuando las reglas y procedimientos formales no se hacen cumplir en forma sistemática. Cuando las instituciones formales resultan ineficaces, por falta de capacidad suficiente, las instituciones informales llegan a actuar como sustitutas y ofrecen bienes y servicios públicos allí donde las instituciones formales no son capaces de hacerlo (ibid. p. 728-9).

Gobernabilidad: Hay dos aspectos de la gobernabilidad que resultan de particular interés para el programa: la naturaleza de la competencia y participación política, y las medidas de control y supervisión a la autoridad estatal.

Los procesos políticos que incluyen a la mayoría de las principales fuerzas políticas y están abiertos a una participación amplia, por lo general, contribuyen a aumentar la

legitimidad del estado. Durante los períodos de transición de conflicto a la paz o de un gobierno autoritario a la democracia, la disponibilidad de más espacio para la deliberación política ayuda a consolidar el proceso de transición y reducir la actividad de los opositores (Papagianni 2008, 2009; Samuels 2009). Una mayor participación popular también ayuda a legitimar el estado a los ojos de sus ciudadanos (OCDE 2008). La política de exclusión, en cambio, se asocia con más violencia y resultados más pobres en cuanto a desarrollo. (Stewart 2008).

Opinión pública y seguridad

El IDRC tiene un proyecto reciente en los Territorios Palestinos Ocupados que consultará sistemáticamente con los ciudadanos palestinos a través de encuestas para medir la percepción pública de los éxitos y fracasos de los actuales procesos de reforma del sector seguridad. Los resultados de la investigación se incorporarán a los esfuerzos del gobierno de Fayyad para reformar las Fuerzas de Seguridad Palestinas.

Las medidas de control y supervisión crean procedimientos de gobernabilidad más responsables que incrementan la estabilidad política. Los ciudadanos pueden realizar el escrutinio de las autoridades públicas e influir en la manera en que los estados responden a sus demandas. Pueden contar también con una mayor capacidad de influir sobre la opinión pública, dentro de sus países y en el exterior, accediendo a nuevos formatos de comunicación masiva. No obstante, cuando estos controles y supervisión están ausentes o son ineficaces, las autoridades suelen incurrir en la violencia, la corrupción o el delito.

La nueva línea de investigación que está siendo lanzada por el programa WRC (Derecho de las Mujeres y Participación Ciudadana) será parte importante del tema de gobernabilidad. La iniciativa sobre "Gobernabilidad democrática, los derechos de la mujer y la igualdad de género" apoyará nueva investigación sobre la participación política de las mujeres marginadas (por ejemplo, minorías étnicas, mujeres indígenas y jóvenes), el papel de los partidos políticos en la promoción de la participación política de las mujeres, y las oportunidades y desafíos en cuanto a equidad de género en situaciones de transición y post conflicto.

Temas a explorar durante el período del proyecto:

- ¿Cuáles son las implicancias de los distintos tipos de acuerdos políticos para la legitimidad y responsabilidad de las autoridades públicas? Las instituciones informales de gobernabilidad pueden ser importantes actores políticos; ¿bajo qué condiciones contribuyen a la sostenibilidad de los acuerdos políticos y cuándo los ponen en peligro? ¿Cuál es el impacto de la integración de grupos armados no estatales en los acuerdos políticos? ¿Cuál es la influencia de los actores del sector privado sobre la legitimidad y responsabilidad de las autoridades públicas?
- ¿Bajo qué condiciones podría un mayor compromiso de los ciudadanos llevar a una mejor respuesta y responsabilidad por parte del estado? ¿Cómo pueden ayudar en dichos procesos las iniciativas de apertura facilitadas por las TICs?

Seguridad: La seguridad con respecto a la amenaza y realidad de la violencia resulta crítica para quienes viven en países en desarrollo; la inseguridad impide el desarrollo económico, social y político. Los expertos cada vez más reconocen la compleja relación entre las fuerzas de seguridad del estado, las milicias privadas y los ciudadanos, y

entienden que la seguridad no es una preocupación puramente del estado. La seguridad ciudadana es ampliamente aceptada como un campo crítico para la investigación y

Justicia de transición

La justicia de transición es una respuesta a las violaciones sistemáticas o generalizadas de los derechos humanos. Busca reconocimiento para las víctimas y promover posibilidades de paz, reconciliación y democracia. La justicia de transición no es una forma especial de justicia, sino una justicia adaptada a las sociedades que se van transformando luego de un período donde prevalecía el abuso de los derechos humanos. En algunos casos, estas transformaciones ocurren de repente; en otros, pueden tardar varias décadas. (www.ictj.org)

muchos analistas encuentran vínculos causales entre las inseguridades públicas y privadas. Las percepciones públicas con respecto a temas de seguridad, en particular cuando se trata de situaciones de fragilidad, ofrecen importantes aportes a los responsables de la elaboración de políticas que se ven enfrentados a recursos y capacidades limitadas para abordar una amplia gama de necesidades de inversión pública.

Si bien en teoría los estados ofrecen seguridad pública, muchas instituciones de países en desarrollo no pueden o no desean hacerlo. Más aún, las respuestas que los estados dan a la violencia

pueden inadvertidamente aumentar la inseguridad pública al fortalecer fuerzas estatales y no estatales irresponsables. En consecuencia, los individuos recurren a quienes ofrecen seguridad privada, como por ejemplo, pandillas, miembros de la familia, tribus o milicias. Las fuerzas de seguridad tanto estatales como no estatales deberían hacerse responsables ante la sociedad, especialmente en lo que respecta a los grupos marginados como las mujeres, grupos indígenas y jóvenes. Estos grupos son los que en general soportan el mayor peso de la violencia y la inseguridad, y las mujeres y niñas, en particular, se ven enfrentadas a serios retos. Por lo tanto, deberían diseñarse políticas efectivas en materia de seguridad para atender así las dimensiones de género específicas de la inseguridad.

Temas a explorar durante el período del prospecto:

- ¿Qué influye en la relación entre los actores estatales y no estatales en situaciones donde coexisten un alto nivel de delincuencia con gobernabilidad democrática? ¿Cómo pueden diseñarse incentivos para desarrollar políticas adecuadas que promuevan la seguridad del ciudadano y protejan sus medios de vida?
- Ante la violencia crónica y las instituciones estatales insensibles, ¿qué estrategias formales e informales usan los ciudadanos y comunidades para aumentar su seguridad? ¿Cuáles son las implicancias en cuanto a la reducción de la violencia? ¿En qué forma impacta la pluralización de los actores de seguridad en los esfuerzos de los ciudadanos por hacerlos responsables? y ¿qué impacto tiene en la creación de fuerzas policiales más efectivas y responsables? ¿Qué papel desempeñan las políticas de seguridad tecnológica emergentes para reducir o reformular esta capacidad?
- ¿De qué manera las diferentes respuestas del estado a la violencia organizada—vinculada a delitos, drogas y tráfico—impactan la legitimidad y responsabilidad de las autoridades públicas, y cuáles son las implicancias en materia de políticas? ¿Qué impacto están teniendo las respuestas del estado —como la nueva legislación anti-pandillas o programas de rehabilitación—en la reducción de la violencia juvenil?

Justicia: El acceso universal a la ley es fundamental para ampliar la participación social y, en el caso de los grupos marginados, confiere personería a los ojos de la sociedad en

general. Más importante aún es el hecho de que el acceso universal a la justicia permite a los ciudadanos –incluyendo a los más desprovistos y marginados—ser contestatarios a la impunidad del estado y las violaciones de derechos. La impunidad exime de la obligación de rendir cuentas, de cumplir penas, castigos o sanciones legales a quienes perpetraron actos ilegales; florece en ausencia de un estado de derecho y amenaza a la democracia y rendición de cuentas por parte del estado.

En el mundo en desarrollo, sin embargo, son muchos los ciudadanos que están sujetos a leyes informales o derivadas de hábitos y costumbres, en lugar de contar con un sistema formal de justicia. En algunos casos, estas leyes y prácticas no garantizan a los ciudadanos un eficaz acceso a sus derechos y recursos esenciales.

En los contextos de post conflicto, la justicia de transición se percibe cada vez más como un componente importante del proceso de recuperación y reconciliación. Sin embargo, en muchos países la naturaleza de dominio elitista de los procesos de justicia de transición hace que estos mecanismos sean ineficaces en su prestación de justicia a las comunidades de base. Del mismo modo, los mecanismos y procesos de justicia de transición que son insensibles a los temas de género se perciben como irrelevantes o ilegítimos por parte de las víctimas femeninas del conflicto o violencia sexual.

Temas a explorar durante el período del prospecto:

- ¿De qué forma buscan los ciudadanos desafiar la impunidad estatal o privada en temas tales como discriminación y violencia sexual? ¿Cómo pueden las iniciativas de acceso a la justicia, facilitadas por las TICs, mejorar las condiciones de los grupos marginados? ¿Bajo qué condiciones es que las iniciativas de responsabilidad estatal brindan resultados positivos o negativos para los ciudadanos?
- ¿Cuáles son las implicaciones de la competencia/colaboración entre cortes formales e informales de acceso a la justicia y qué implicaciones tienen con respecto a los derechos de los ciudadanos?
- ¿Qué impacto tiene la justicia de transición sobre la legitimidad y rendición de cuentas del estado? ¿Cuáles son las implicancias en materia de ciudadanía democrática?

3. Enfoque de Programación

a. Meta del Programa

La meta del programa GSJ es apoyar la creación de conocimiento relativo a políticas sobre las condiciones para aumentar la legitimidad y rendición de cuentas de las autoridades públicas en las áreas de gobernabilidad, seguridad y justicia. El programa construirá un nicho de investigación mediante la promoción de una investigación de base local, específica a un determinado contexto. El objetivo es generar comprensión acerca de qué funciona bien y por qué, creando así principios que puedan ser relevantes en otros contextos, a la vez que se eviten generalizaciones inadecuadas. De tal modo, el programa apunta a contribuir al debate mundial sobre gobernabilidad e intervenciones estratégicas en situaciones frágiles afectadas por algún conflicto. En virtud de algunos de los riesgos inherentes al área temática, incluyendo la seguridad de los investigadores y la poca

receptividad de los resultados por parte de estados y donantes, el programa será selectivo en cuanto a los temas en que incursionará en determinados países y buscará múltiples formas de involucramiento para poder incidir en la elaboración de políticas.

b. Resultados del Programa

El programa buscará el logro de resultados en tres áreas: (i) generación de conocimiento sobre gobernabilidad, seguridad y justicia; (ii) fortalecimiento de la capacidad de los investigadores beneficiarios del financiamiento no reembolsable; y (iii) generación de oportunidades para que la investigación pueda incidir en las políticas. La identificación e implementación de lo anterior nos permitirá contribuir al conocimiento en materia de políticas que refiera a la naturaleza, calidad e impacto de las interacciones estado-sociedad con respecto a los problemas de gobernabilidad, seguridad y justicia en el mundo en desarrollo.

Nuestros principales interlocutores serán nuestros beneficiarios, incluyendo instituciones y redes de investigación de alta y baja capacidad. Los expertos sectoriales y las organizaciones de la sociedad civil local mejorarán el análisis contextual del programa y las líneas de base regionales. Para que la investigación de nuestros beneficiarios tenga más relevancia en el campo de las políticas, los responsables de la programación del GSJ colaborarán con ellos para vincularlos a los actores involucrados en políticas en todos los niveles. Cuando corresponda, trabajaremos con los gobiernos para promover la aceptación de las políticas. Asimismo, el programa se focalizará en las oportunidades estratégicas para influir en la elaboración de políticas mediante la participación con donantes internacionales, organizaciones regionales y la comunidad canadiense especializada en el campo de las políticas. En algunos casos, la colaboración de GSJ con otras iniciativas del IDRC ayudará a difundir las conclusiones de la investigación y ampliar el alcance de nuestro trabajo.

c. Estrategia y Enfoque del Programa

Contextos de programación: El programa examinará temas en situaciones frágiles y afectadas por conflictos y en países en vías de transición. A comienzos del ciclo del programa, los oficiales del mismo compilarán evaluaciones regionales de base para destacar las prioridades específicas de la región en las tres áreas temáticas básicas, para seguir la pista de investigaciones relevantes de donantes e investigadores locales, y para identificar potenciales sendas de oportunidad para incidir en políticas (a nivel local, nacional y regional). Estas evaluaciones intentarán identificar tanto a los líderes de investigación como a los líderes del cambio, con quienes el programa podría establecer asociaciones.

Metodologías: El hecho de que GSJ se enfoque en las interacciones entre estado y sociedad y su compromiso sea realizar una investigación específica a un contexto, significa que el programa dará prioridad a los estudios de caso y comparaciones entre los casos. Los estudios ricos en detalles son los más indicados para sondear las dinámicas locales de las variables y procesos en general. Son también las mejores herramientas para el desarrollo de recomendaciones útiles en materia de políticas para los contextos

específicos a nivel local, nacional o regional. En la medida de lo posible, nuestros proyectos serán de naturaleza comparativa, aportando inferencias más sólidas y conclusiones más válidas. Las comparaciones se realizarán a nivel nacional, regional y entre regiones. Más aún, las comparaciones de casos controladas constituyen la manera más adecuada de desarrollar inferencias causales sólidas y entender mejor cómo algunas variables similares pueden combinarse de diferentes maneras para producir resultados divergentes.

No obstante, el enfoque sobre estudios de caso específicos a un contexto no implica un enfoque exclusivo en métodos de investigación cualitativa. Si bien muchos de nuestros beneficiarios podrían emplear la entrevista con informantes clave, el análisis de documentos y la etnografía, GSJ también procurará activamente la participación de investigadores capacitados en la conducción y análisis de encuestas de muestra amplia, regresión estadística y econometría nacional cruzada. Algunos de nuestros estudios de caso se situarán dentro de temas más amplios que hayan sido identificados mediante los análisis en todo el territorio nacional, mientras que otros análisis de caso se basarán en encuestas estadísticamente representativas dentro de un país en particular o regiones sub-nacionales.

La investigación que apoyamos será metodológica y teóricamente interdisciplinaria. Incluirá teorías, perspectivas y herramientas prestadas por las ciencias políticas, la economía, los estudios feministas, los estudios legales, la sociología y la antropología. Típicamente, la investigación incluirá análisis en profundidad de las dimensiones de género dentro de los temas y desagregará sus recomendaciones sobre políticas por género, cuando corresponda. La naturaleza específica de un contexto del área de investigación del programa puede implicar también el uso de métodos de investigación-acción participativa.

El programa desarrollará una cartera bien equilibrada de proyectos que incluirá tanto propuestas solicitadas como no solicitadas, investigadores experimentados y noveles, asociaciones en investigación ya establecidas o nuevas. Mientras que la mayor parte de estas actividades se centrará en temas de gobernabilidad, seguridad y justicia a través de la lente de las interacciones estado-sociedad, el programa apartará un 10% del presupuesto de cada año que irá a un “fondo flexible” que le permitirá responder a temas emergentes y crisis no anticipadas, oportunidades de colaboración con socios estratégicos clave como por ejemplo el gobierno de Canadá, y para explorar nuevos caminos de investigación.

Desarrollo de capacidad: Al apoyar una investigación de base local fundamentada en casos, específica a un contexto y en entornos complejos que constituyen retos, el programa contribuirá principalmente al desarrollo de la capacidad individual y, en segundo lugar, al desarrollo de la capacidad de las instituciones. El programa apoyará tanto a los investigadores de destacada trayectoria como a los noveles para mejorar así la elaboración de políticas basada en la evidencia a niveles múltiples.

Para contribuir al desarrollo de una nueva generación de investigadores, el programa alentará activamente las mentorías intergeneracionales en el diseño de proyectos, implementación y difusión de las conclusiones del mismo, incluyendo publicaciones de co-

autoría entre investigadores experimentados y junior, cuando corresponda. Estas estrategias de desarrollo de capacidades también se implementarán para propiciar el desarrollo de la dimensión de género en el diseño de investigación, implementación y difusión, así como para asegurar el equilibrio de género en la integración del equipo del proyecto. Asimismo, se capacitará sobre el tema de los vínculos entre investigación y políticas al personal del programa y los investigadores beneficiarios, lo cual contribuirá al logro de los resultados esperados.

Comunicación para incidir: Combinando su apoyo a los beneficiarios locales y sus relaciones estratégicas con los actores en políticas (locales, regionales e internacionales), el programa estará bien instalado para asumir un papel más sustancial como *agente de conocimiento*. Si bien el programa dedicará la mayor parte de sus recursos al apoyo de investigación de base local sobre gobernabilidad, seguridad y justicia, lo hará de manera tal que facilite nuestra capacidad de aprovechar opiniones analíticas a nivel de programa en temas que también sean importantes tanto para la comunidad académica como para la vinculada a políticas de desarrollo. Esto implicará adaptar las herramientas de monitoreo y evaluación del proyecto para relevar datos a nivel de programa a través del ciclo del programa, y dedicar recursos humanos del equipo para realizar actividades de síntesis que establezcan puentes entre los investigadores y los socios estratégicos. Implicará también el identificar temas/oportunidades emergentes en materia de políticas que podrían ser abordados con ayuda de la investigación que apoya el programa. Las evaluaciones regionales de línea de base contribuirán a esta función de agencia del conocimiento.

Para sustentar la intención del programa en cuanto a apoyar investigación de base local relativa a políticas, alentaremos la generación de productos de la investigación en idiomas locales y dedicaremos recursos a su traducción en otros idiomas (inglés y francés) para facilitar su difusión internacionalmente y en Canadá. También aseguraremos que los recursos en los presupuestos de los proyectos se dediquen a facilitar la participación de los beneficiarios en conferencias regionales e internacionales.

El programa buscará oportunidades para integrar a los beneficiarios en redes temáticas adecuadas. El programa utilizará el modelo de subvenciones con valor agregado (*grants-plus model*) para trabajar con los beneficiarios en el desarrollo de planes de comunicación efectivos y desarrollará una serie de herramientas de síntesis hechas a la medida de públicos y propósitos específicos (por ejemplo, los desafíos éticos de realizar investigaciones en contextos violentos, la utilidad de la investigación de base local para incidir en la elaboración de políticas, etc.).

Identificaremos oportunidades para convocar a talleres estratégicos sobre temas concretos o reuniones de grupos de expertos para incrementar el diálogo y la transferencia de conocimiento. Un aspecto de particular importancia será nuestra capacidad de informar y ser parte del diálogo sobre política exterior canadiense. Asimismo, cultivaremos una colaboración efectiva con socios estratégicos para promover la importancia que tiene una investigación de base local basada en la evidencia para la toma de decisión.

d. Prioridades Regionales y Temáticas

El programa GSJ promoverá un enfoque integral de las interacciones entre estado y sociedad, a partir de las realidades locales. La interrelación entre gobernabilidad, seguridad y justicia resuena a través de las regiones en que trabaja el IDRC, si bien con diferentes grados de variación. En las siguientes secciones se presentan los potenciales puntos de entrada para la investigación en cada región.

Latinoamérica y el Caribe

La violencia, en su multiplicidad de formas, escala vertiginosamente en muchos países de Latinoamérica y el Caribe. Preocupa en especial el aumento de los niveles de delincuencia organizada puesto que corrompe rápidamente a sociedades y al estado y socava la democracia. Los abordajes militaristas ante la inseguridad resultan inefectivos. Se torna esencial fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones democráticas del estado para contrarrestar los altos niveles de impunidad y reducir la violencia. Las estrategias deben de atender de manera integral las causas primordiales de la violencia, incluyendo la violencia de género, y las intrincadas dimensiones de la inseguridad, como por ejemplo los aspectos económicos de la inseguridad pública y el delito organizado. Se requiere una comprensión alternativa del tema seguridad para captar las dimensiones emergentes como la seguridad socio-ambiental, y construir sobre los avances en los temas de investigación, como en el caso de la seguridad ciudadana. Se necesita más investigación que promueva una comprensión inclusiva e interrelacionada de la seguridad y la justicia, en particular con respecto a sus dimensiones de base cultural y comunitaria.

Oriente Medio y Norte de África

La región de Oriente Medio y Norte de África sigue sufriendo un déficit democrático caracterizado por procesos de gobernabilidad que son mayormente cerrados y excluyentes. Los regímenes de Oriente Medio se apoyan en medidas coercitivas y violentas, y este entorno político represivo ha llevado a crear instituciones públicas que no rinden cuentas y una relación débil entre ciudadanos e instituciones del estado. La continua violencia armada y los conflictos interestatales también han llevado a incrementar la inseguridad pública. Una multiplicidad de factores locales y nacionales, además de la naturaleza represiva del estado, dificulta el acceso general de los ciudadanos a las instituciones de justicia. En algunos casos, los procesos judiciales y las instituciones nacionales carecen de legitimidad y son reemplazadas con una versión moderna (o una existencia permanente) de instituciones tradicionales. Para la región MENA, se requiere investigación que permita explorar los procesos de reforma política e investigar estrategias específicas que permitan a la oposición abogar por reformas y obtener concesiones de los regímenes en ejercicio del poder. Asimismo, la participación y representación política, en particular de la mujer, sigue siendo menor en los países de MENA, y se requiere investigación para explorar los temas y desafíos clave relativos a participación en la toma de decisiones políticas, el poder judicial y el sector público.

África Occidental y Central

La inseguridad alimentaria, la pobreza y la desigualdad económica, el delito organizado, los efectos de la migración, la inseguridad y la exclusión de ciudadanos en la toma de decisiones se encuentran entre las preocupaciones clave de esta región. En muchos casos, existe una falta de voluntad política o falta de capacidad para que las autoridades

públicas respondan a las necesidades de los ciudadanos. Esto lleva a la marginalización de grupos como mujeres y jóvenes, que siguen enfrentados al reto de acceso a la justicia, seguridad, recursos y servicios públicos. Se requiere investigación para examinar y comprender estrategias que permitan fortalecer prácticas formales y alternativas de inclusión, participación, rendición de cuentas y justicia. Focalizarse en la construcción del estado, las democracias emergentes y relaciones mejoradas entre estado y ciudadanos resulta fundamental para la mayoría de los países de África Occidental. El fin del conflicto armado y la realización de elecciones bien organizadas en la región han contribuido a restaurar la legitimidad de los procesos democráticos de las naciones; sin embargo, las democracias emergentes enfrentan enormes problemas: poco involucramiento de los ciudadanos en reformas impulsadas por el estado; el advenimiento de golpes militares; y elecciones reñidas y excluyentes. Las instituciones del estado suelen no rendir cuentas y carecen de la confianza pública. Una estrategia para atender esta situación es a través del involucramiento ciudadano, puesto que los ciudadanos pueden desempeñar un papel activo a la hora de monitorear el gasto público e informar sobre políticas públicas. Para África Occidental la investigación sobre construcción del estado dentro de la región sería de utilidad en cuanto a proponer mecanismos de consulta e inclusión de ciudadanos en los debates públicos. Se requiere investigación que se focalice en mejorar la relación entre los centros de investigación e instituciones, así como también investigación sobre el papel de las organizaciones regionales en las situaciones de post conflicto. Asimismo, se necesita investigación crítica para comprender el papel y los efectos de las instituciones originadas por hábitos y costumbres en los procesos de legitimidad y construcción del estado.

África Oriental y del Sur

En varios de los países de África Oriental y del Sur, los permanentes conflictos interestatales e internos y la inestabilidad o colapso absoluto de las estructuras de la gobernabilidad constituyen un enorme obstáculo para el logro de seguridad y justicia para los ciudadanos. A pesar de los procesos democráticos y las reformas, varios estados luchan por implementar reformas institucionales que respondan a las necesidades de todos los grupos de ciudadanos. La constante inequidad genera más oportunidades de conflicto. Las elecciones rara vez son justas, democráticas e inclusivas. Los partidos gobernantes son renuentes a abrir los espacios políticos. Es más, los partidos políticos en general no son ni efectivos ni inclusivos a nivel de sus propias estructuras. Existe la necesidad de mejorar la gobernabilidad en materia de seguridad a nivel sub-nacional y regional, en la medida que los sistemas nacionales han tendido a servir los intereses de los partidos gobernantes, contribuyendo así al mantenimiento del autoritarismo. Una investigación sobre las percepciones de los ciudadanos con respecto a la legitimidad de las instituciones del estado, incluyendo el aparato de seguridad, contribuirá a la continuidad de los procesos de transformación en materia de seguridad.

Sur y Sudeste de Asia

En el transcurso de las últimas décadas, el Sur y Sudeste de Asia han experimentado un sorprendente crecimiento económico y una proliferación de instituciones y procesos democráticos. Aún así, persisten la violencia y la inseguridad. Prolifera la impunidad y los antagonismos comunitarios y sectarios de profundo arraigo desencadenan conflictos

étnicos y políticos, terrorismo y la sistemática marginación de ciertos grupos, incluyendo mujeres y minorías étnicas y religiosas. Esta situación se ve exacerbada a causa de las desigualdades económicas y movimientos masivos de personas en busca de seguridad económica y humana. Se trata además de una de las zonas del mundo más proclives al conflicto. Los ciudadanos, especialmente las mujeres y las minorías religiosas y étnicas, siguen enfrentando serias barreras de acceso a la justicia y la seguridad. En muchos casos, las autoridades públicas de la región no están dispuestas ni son capaces de responder a las necesidades de sus diversos ciudadanos, ni siquiera cumplen con los compromisos asumidos para lograr la paz. La impunidad, que es la exoneración de toda responsabilidad y es, por lo tanto, una amenaza a la democracia y rendición de cuentas, prolifera en la región. Se necesita investigación crítica para examinar estrategias que permitan fortalecer prácticas de participación democrática y culturas de responsabilidad y justicia en la región. Esto requerirá mayor investigación acerca de cómo los individuos, en particular los que pertenecen a grupos marginados, experimentan la ciudadanía, la seguridad y la justicia. Al mismo tiempo, el Sur y Sudeste de Asia conforman un campo fértil para explorar las condiciones bajo las cuales la participación ciudadana produce autoridades públicas receptivas y responsables, sociedades inclusivas, y por último una reducción de la violencia y la inseguridad. Algunos ejemplos recientes incluyen la movilización de ciudadanos alrededor de Derecho a la Información en India; acción ciudadana y activismo judicial en Pakistán e India y un movimiento profundamente arraigado para poner fin a la monarquía y restablecer la democracia en Nepal.

4. Referencias

Abrahamson, Rita. 2009. "Public Insecurity Violence and Development: A Background Paper for the International Development Research Centre."

Bellina, Séverine, Dominique Darbon, Stein Sundstøl Eriksen, y Ole Jacob Sending. 2009. "The Legitimacy of the State in Fragile Situations." Informe para la Red Internacional sobre Conflicto y Fragilidad de OCDE-CAD.

Benequista, Nicholas; Gaventa, John; y Barrett, Gregory. 2010. "Putting Citizens at the Centre: Linking States and Societies for Responsive Governance: A Policy-maker's Guide to the Research of the Development Research Centre on Citizenship, Participation and accountability."

Collier, Paul. 2007. "The Bottom Billion." Oxford: Oxford University Press Inc.,

Collier, Paul. 2009. "Development in Dangerous Places." The Boston Review. Julio/Agosto, 2009.

Collier, Paul. 2009. "A Worldwide Pact for Security and Accountability in Fragile Bottom Billion State." Development Outreach, Volumen 11, Número 2.

Department for International Development (DFID). 2010. "The Politics of Poverty Elites, Citizens and States: Findings from Ten Years of DFID-funded Research on Governance and Fragile States, 2001-2010- a synthesis paper." UKAid. Glasgow, Reino Unido.

Geneva Declaration Secretariat. 2008. "Geneva Declaration: Global Burden of Armed Violence."

Helmke, Gretchen y Levitsky, Steven. 2004. "Informal Institutions and Comparative Politics: a Research Agenda."

Institute of Development Studies. 2010. An Upside Down View of Governance. Center for the Future State y el Institute of Development Studies. Universidad de Sussex, Brighton.

Jutersonke, Oliver, Robert Muggah, y Dennis Rodgers. 2009. "Gangs and Violence Reduction in Central America." *Security Dialogue* 2009 Volumen 40, No. 4-5.

Maley, William. 2008. "Building Legitimacy in Post-Taliban Afghanistan." En: Rennie, R. "State Building, Security, and Social Change in Afghanistan - Reflection on a Survey of the Afghan People. 11-26. Kabul: The Asia Foundation.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2007. "Enhancing the Delivery of Justice and Security Governance, Peace and Security."

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2008. "Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From Fragility to Resilience." Off-print of the Journal on Development, 2008, Volumen 9, No.3.

Papagianni, Katia. 2009. "Political Transitions after Peace Agreements: The Importance of Consultative and Inclusive Political Processes." Journal of Intervention and State building. 3:1. Marzo 2009.

Papagianni, Katia. 2008. "Participation and State Legitimation." En Call, C.T. y Wyeth, V (Eds). Building States to Build Peace. Lynn Rienner, Boulder, Colorado.

Paris, Roland. 2009. "Institutions of Governance in Post-Conflict and Fragile States: A Background Paper for the International Development Research Centre."

Ross, Julia. 2010. "MDG Summit: Day 1 Wrap-Up." *World Bank Meetings Center*. Banco Mundial. 21 Sep 2010. Acceso Web. 28 Sep 2010.

Samuels, Kirsti. 2008. "Constitutional Choices and State building in Post Conflict Countries." En Paris, R y Sisk, T (Eds). The Dilemmas of State building: Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations. Routledge, 2008.

Smyth, Thomas et al. 2010. "MOSES: Exploring New Ground in Media and Post-Conflict Reconciliation." en *Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems*, 1059-1068.

Stewart, Frances. 2008. Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding group violence in Multi-ethnic societies. Palgrave Macmillan.